XDO. CONTENCIOSO/ADMTVO. N. 2 VIGO

SENTENCIA: 00073/2022

-

Modelo: N11600
C/ LALIN N° 4, PISO 5° EDIFICIO N°2
Teléfono: 986 817860/72/61 Fax: 986 817873
Correo electrónico:

Equipo/usuario: JC

N.I.G: 36057 45 3 2022 0000015
Procedimiento: PA PROCEDIMIENTO ABREVIADO 0000006 /2022 /
Sobre: ADMON. LOCAL
De D/Dª:
Abogado: MIRIAM OLIVARES DIEZ
Procurador D./Dª: OLGA MOSQUERA LORENZO
Contra D./Dª CONCELLO DE VIGO, CONTENUR, S.L. , ALLIANZ ALLIANZ
Abogado: LETRADO AYUNTAMIENTO, JOSE LUIS MOLINA FRAGIO ,
Procurador D./Dª , , MARIA DEL CARMEN VIDAL RODRIGUEZ

SENTENCIA Nº 73/22

En Vigo, a 29 de marzo de 2022

Vistos por mí, Marcos Amboage López, magistrado-juez del Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 2 de Vigo, los presentes autos de procedimiento abreviado, seguidos a instancia de:

- representada por el procurador/a: Olga Mosquera Lorenzo y asistida por el letrado/a: Miriam Olivares Diez, frente a:

- Concello de Vigo representado y asistido por el letrado/a: Pablo Olmos Pita.

-Codemandado: "ALLIANZ SEGUROS, S.A.", representada por la procuradora Carmen Vidal Rodriguez.

- Codemandado: "Contenur España, S.L." representado y asistido por el letrado/a: José Manuel Fernández Arevalo, en sustitución de José Luis Molina Fragío.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El 8 de enero del 2022 la representación procesal indicada en el encabezamiento presentó mediante demanda recurso contencioso-administrativo frente a la desestimación presunta de la reclamación de responsabilidad patrimonial que había presentado el 21 de mayo del 2021, dirigida al Concello de Vigo, y recaída en el expediente nº 6453/243. En la demanda pide que tras la declaración de la disconformidad a Derecho de la actuación se condene a la demandada al abono de la cantidad de 505,19 euros, incrementados en sus intereses legales desde la reclamación administrativa, con imposición de costas.

SEGUNDO.- Se admitió a trámite por decreto de 12 de enero y el 4 de marzo del 2022, se ha recibido el expediente administrativo.

Ha comparecido en calidad de codemandada la entidad "Contenur España, S.L." y la entidad ALLIANZ Seguros, S.A.

El 10 de marzo tuvo lugar la vista a que se refiere el art. 78 de la Ley de la Jurisdicción contencioso-administrativa (en adelante, LJCA), y en ella la actora se ha ratificado en su demanda, la demandada trasladó en primer lugar que se había dictado una propuesta de resolución del expediente de responsabilidad patrimonial, en fecha 28 de febrero del 2022, estimatoria de la reclamación presentada.

La codemandada "Contenur España, S.L." mostró su disconformidad con dicha resolución y rechazó, en todo caso, su responsabilidad en los daños causados, recordando que no puede ser condenada por no haber sido así interesado.

Se fijó la cuantía del procedimiento definitivamente en la suma de 505,19 euros. Abierto el trámite de prueba, las partes se remitieron a la documental y al expediente administrativo.

Tras el trámite de conclusiones, quedaron los autos vistos para sentencia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Expresa el art. 36.1 LJCA:

"Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algún acto, disposición o actuación que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitación la relación prevista en el artículo 34, el demandante podrá solicitar, dentro del plazo que señala el artículo 46, la ampliación del recurso a aquel acto administrativo, disposición o actuación."

En el presente caso la actora no ha solicitado la ampliación del recurso y menos mal, ya que tampoco resultaría admisible, puesto que sigue sin existir una resolución expresa del procedimiento y la simple propuesta no constituye actividad administrativa impugnada, y por tanto, de imposible ampliación.

El hecho de que el objeto del procedimiento lo constituya un silencio, una desestimación presunta, como saben las partes, simplifica notablemente el debate, puesto que lo resolveremos de acuerdo con los principios generales que inspiran la materia que ocupa, y que vienen a enseñar que el particular que resulte perjudicado por el funcionamiento normal o anormal del servicio público, sin culpa de su parte y sin la concurrencia de fuerza mayor, tiene el derecho a ser indemnizado de los daños y perjuicios que se le hubieran causado, que no tiene el deber de soportar y siempre que se demuestre por su parte que existe una conexión causal directa entre aquel funcionamiento del servicio y la producción del daño.

En el presente caso, a la vista de los términos en los que se plantea el debate, queda claro que no se discuten los presupuestos anteriores, de ahí la imperiosa estimación de la demanda, ya que la recurrente había estacionado correctamente su coche el 18 de septiembre del 2020, a la altura del nº 27 de la calle Teixugueiras, de Vigo, y cuando al día siguiente se dispuso a recogerlo, observó como tenía un contenedor de la basura apoyado encima de su parte delantera, concretamente, sobre el foco delantero izquierdo y defensa. Requirió la actora la presencia de una patrulla de la policía local que confeccionó el informe de intervención, acompañado de fotografías expresivas de lo acontecido y sus resultados. Ese informe ratifica la ausencia del deber de soportar el daño por la perjudicada, debido a que corrobora que el coche estaba correctamente aparcado y, en cambio, el contenedor de residuos sólidos urbanos, se encontraba desplazado de la ubicación que tiene reservada en la vía pública, con señalización horizontal, y montaba ligeramente aquellas partes del coche de la demandante. El informe corrobora la existencia de leves daños causados sobre el coche, respecto de los que la afectada negó su preexistencia y que racionalmente se correspondía con el impacto del elemento urbano. Es decir, el informe policial ratifica la versión de la actora, de la demanda, con la apostilla de que hubo de ser precisa la maniobra del coche, hacia atrás, para poder desencajar el contenedor montado sobre su defensa.

No hay controversia, entonces, ni sobre la realidad del hecho, ni sobre su habilidad para causar perjuicio, ni por el importe de los daños causados, ni sobre la ausencia de

responsabilidad de la reclamante en su causación, de ahí que, ante el silencio de la demandada, cuya sea la responsabilidad en primera instancia de lo acontecido, sin perjuicio de la facultad de repetición que le asista sobre la concesionaria responsable del hecho.

SEGUNDO.- Apunte útil para la demandada: a pesar de que no se hubiese solicitado, ni acordado la ampliación del recurso contencioso administrativo, ello no nos obsta al examen completo del mismo y en particular, al análisis de la última actuación de la demandada consistente en la propuesta de estimación de la reclamación de la interesada, solo en cuanto a su principal (que es lo que se había reclamado), y que declara la responsabilidad de la entidad "Contenur España, S.L."

Hemos de reconocer que coincidimos en buena medida con sus completos razonamientos, salvo con uno, el que justamente interesa, el que dirime la atribución de la responsabilidad y que se aborda en su punto séptimo, cuando expone: **En" segundo lugar, alega que a responsabilidade correspondería á concesionaria encargada do baleirado dos colectores porque, segundo sinala, "resulta claro que el siniestro se produxo con motivo del vaciado mecánico de los contenedores de RSU", alegación que tamén temos que desestimar xa que non aporta proba algunha que avale dita afirmación".**

No estamos de acuerdo con la anterior apreciación y expresamos nuestra disconformidad con la esperanza de que sirva para una más justa solución definitiva de la controversia en orden a la atribución de la responsabilidad, al menos, en supuestos de hecho como el que se nos presenta. Conocemos que la responsabilidad en el manejo de los contenedores de basura, en el Concello de Vigo, se encuentra deslindada desde la perspectiva contractual, debido a que son dos entidades concesionarias distintas las que intervienen en el proceso, adjudicatarias de los servicios de limpieza de la ciudad, y de la colocación, mantenimiento y limpieza de los contenedores, respectivamente. Las primeras obligaciones corresponden a la mercantil "FCC medio ambiente, S.A." y las segundas incumben a "Contenur España, S.L.", y ambas excusan con rotundidad su propia responsabilidad, o se la atribuyan a la otra. Y como vimos, la demandada en su propuesta, nada dice de las alegaciones presentadas por la mercantil "FCC medio ambiente, S.A." y rechaza las opuestas por "Contenur España, S.L."

Pues bien, lo primero que cumple recordar es que al particular perjudicado por la acción de un contenedor de basura, le resulta absolutamente indiferente que la responsabilidad se residencie en último término en una u otra adjudicataria.

Lo segundo que hay que matizar es que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 75 y 77.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (en adelante, LPAC), entiendo que pesa sobre la demandada, sobre el instructor, el deber, que no posibilidad trasladable en forma de carga de la prueba a los interesados, de esclarecer las circunstancias en las que se han producido los hechos respecto de los que se va a apreciar la responsabilidad. Con ello queremos decir que la desestimación de las alegaciones de "Contenur España, S.L.", no pueden descansar solo en el hecho que se dice de que no ha aportado prueba de su afirmación. Si la demandada no tiene por ciertos los hechos son relevantes para la decisión, puede, debe practicar prueba para su completo esclarecimiento. Y por fin, lo tercero que queremos apuntar respecto de aquella argumentación expresada en la propuesta de resolución, es que la lógica y la razón, criterios que deben presidir cualquier valoración probatoria, nos empujan a entender que lleva razón la entidad "Contenur España, S.L." en sus alegaciones. Esto es, a menos que se demuestre que el contenedor de basura hubiera sido manipulado por operarios de esa entidad en fecha anterior al 19 de septiembre del 2020, para ejecutar cualquiera de las labores que le son propias (limpieza, mantenimiento, sustitución...), la responsabilidad de lo acontecido debe situarse sobre la otra contratista, "FCC medio ambiente, S.A.", ya que, a falta de otras pruebas, con altísima seguridad, a la vista de los términos del informe policial y de las fotografías que lo componen, el hecho se ha debido a una indebida, negligente o descuidada manipulación del contenedor en las maniobras propias de su vaciado. Concretamente, al depositarlo en la vía pública, tras descargar su contenido en el camión de recogida de los residuos, que es la maniobra que en sus alegaciones, reconoce "FCC medio ambiente, S.A." que es de su competencia. Y ello a pesar de que afirme que, tras consulta de los partes de trabajo del día 19 de septiembre del 2020, los operarios no han relacionado ningún incidente al respecto; normal. A lo mejor hay que buscar en los partes del día 18 de septiembre, o a lo peor, los operarios de esta mercantil, no han relacionado nada sencillamente porque no han sido conscientes de la maniobra ejecutada indebidamente, o con descuido. Parece lógico representarse que de haber reparado en el resultado de la acción, se hubiese hecho lo posible por corregir sus efectos, al menos, por descabargar el contenedor del coche, aunque el daño se hubiese ya consumado. En suma, administrativamente, a efectos de repetición, la demandada debe replantearse la culpabilidad de lo acontecido, ya que entendemos que la autoría de los hechos hay que buscarla como indiciariamente apuntaba la nota

colocada en el limpiaparabrisas del coche, en el camión de la basura. El resultado fotografiado del contenedor sobre la defensa del coche, solo puede alcanzarse mediante la manipulación mecánica del recipiente.

No nos hallamos en el presente supuesto en uno de tantos en los que el daño procedente de un contenedor de basura, se presenta causalmente debido al desplazamiento inopinado e indebido de éste del lugar en el que debe estar emplazado, por acción del viento, o de cualquier otro fenómeno, cuando apreciamos la responsabilidad de la concesionaria, "Contenur España, S.L."

Jurisdiccionalmente, sin embargo, el anterior debate huelga y la acción debe ser acogida íntegramente, apreciando la disconformidad a Derecho, de la actuación impugnada, que se anula y revoca y se condena al Concello de Vigo a indemnizar a la recurrentes con la cantidad de 505,19 euros, incrementada en los intereses legales devengados desde la reclamación previa, el 21 de mayo del 2021.

TERCERO.- En lo que a las costas del proceso se refiere, en el artículo 139.1 LJCA, se establece el principio de vencimiento objetivo, por lo que merecen ser impuestas a la demandada. No obstante el mismo precepto permite su limitación y según criterio mantenido por los juzgados de lo contencioso-administrativo de esta ciudad y atendiendo a la naturaleza y cuantía del litigio, no apreciando circunstancias excepcionales que aconsejen fijar otro importe, se señala como límite máximo de la condena en costas, por los honorarios de abogado, la suma de 200 euros

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación,

FALLO

Estimo el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la procuradora Olga Mosquera Lorenzo, en nombre y representación de , frente al Concello de Vigo, y la desestimación presunta de la reclamación previa recaída en el expediente nº 6453/243, que declaro disconforme a Derecho, anulo y revoco, y condeno al Concello de Vigo a indemnizarle con el abono de la suma de 505,19 euros, incrementada en los intereses legales devengados desde la reclamación previa.

Con imposición de costas, con el límite expuesto.

Notifíquesele esta sentencia a las partes del proceso, con la indicación de que es firme, por lo que contra ella no cabe interponer recurso alguno.

Remítase testimonio de esta sentencia a la Administración demandada, en unión del expediente administrativo.

Así por esta mi sentencia, de la que se llevará testimonio a los autos de su razón, quedando la original en el libro de sentencias, lo pronuncio, mando y firmo.